

Comunidad
de MadridCONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

ORDEN**NÚMERO 1198/2026**

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Acuerdo Marco: AM-004/2019

Expte: **CDAM004-2019-26-S6588**

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes

Examinadas las actuaciones practicadas y documentos obrantes en el expediente de determinación de responsabilidades por incumplimiento de la obligación contractual establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, referente a lo establecido en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad, procede resolver teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Mediante Orden 184/2020, de 19 de febrero, de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, se acuerda la adjudicación del Acuerdo Marco de Servicios, denominado **“ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL. PROGRAMA I+I”**.

A través de la Orden 550/2020, de 20 de mayo del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, actualmente Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, (P.D. Orden 92/2020, de 4 de febrero, BOCM de 21/02/2020), del Secretario General Técnico, se adjudicó el contrato basado a la citada entidad, con 30 unidades de atención en el Centro SERVICIO DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL PINARDI VALORA (S6588), por un importe total de 123.717,00 euros, IVA exento,

El contrato entre ambas partes se formalizó el día 16 de marzo de 2020, y el plazo de ejecución del contrato basado en el Acuerdo Marco fue desde el día 1 de junio de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021, pudiéndose prorrogar en uno o varios periodos, hasta un máximo de 48 meses adicionales. El contrato ha sido prorrogado en cuatro ocasiones.

Por Orden 191/2021, de 24 de febrero, de La Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, se aprueba la primera prórroga del referido contrato hasta el día 31 de mayo de 2022.

Por Orden 570/2022, de 24 de marzo, de La Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, se aprueba la segunda prórroga del referido contrato hasta el día 31 de mayo de 2023.

Por Orden 1141/2023, de 17 de abril, de La Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, se aprueba la prórroga del referido contrato hasta el día 31 de mayo de 2024.

Por Orden 581/2024, de 04 de marzo, de La Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, se aprueba la prórroga del referido contrato hasta el día 31 de mayo de 2025.

Para responder de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista constituyó garantía definitiva por importe de 6.185,85 euros (resguardo 202055003088Y de fecha 13 de octubre de 2020), en su modalidad de retención en precio.

Vencido el contrato por el transcurso de su periodo de ejecución, y tras la tramitación del oportuno expediente administrativo, mediante la Orden 3736/2025 de 5 de noviembre, de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales se aprueba su liquidación total por un importe de 618.585,00 euros.

Liquidado el contrato, se inicia el procedimiento para tramitar la devolución de la garantía definitiva constituida acudiendo a comprobar el cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 4 del Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratación administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, de tener contratado al menos un 2 por 100 de trabajadores con discapacidad en caso de que la plantilla total de la entidad, durante el periodo de ejecución del contrato, supere los 50 trabajadores, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

SEGUNDO.- Con fecha de 21 de junio de 2025 se emitió requerimiento al contratista para el aportase de la siguiente documentación:

- Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social en la que conste el número de trabajadores de plantilla durante el periodo de vigencia del contrato.
- En caso de superar los 50 trabajadores, certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo del porcentaje de personal discapacitado contratado en la empresa durante el periodo de vigencia del contrato incluidas sus prórrogas o, en su defecto, copia de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad o documentación acreditativa de la realización de medidas alternativas, hasta acreditar el cumplimiento de la obligación de reserva del 2 por 100 en favor de trabajadores con discapacidad.

Como respuesta al citado requerimiento, en fecha 14 de noviembre de 2025 el contratista remite declaración responsable en la que pone de manifiesto el incumplimiento parcial de la obligación establecida en el Artículo 4 del Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de Gobierno, aportando la siguiente información que ha sido contrastada documentalmente:

AÑO	DESDE	HASTA	DÍAS	PLANTILLA MEDIA	2%	DÍAS A ACREDITAR	ACREDITA DISCAPACIDAD		DÍAS QUE NO SE ACREDITAN
							TRAB.	DÍAS	
2020	01/06/2020	31/12/2020	214	141,48	2,83	606	1	214	
2021	01/01/2021	31/12/2021	365	136,28	2,73	995	3	365	
	11/01/2021	31/12/2021						355	
	13/10/2021	31/12/2021						80	
2022	01/01/2022	31/12/2022	365	141	2,82	1.029	3	1.095	
	22/09/2022	31/12/2022					1	101	
2023	01/01/2023	31/12/2023	365	176,67	3,53	1.290	3	1.095	
	01/01/2023	22/09/2023					1	265	
2024	01/01/2024	28/04/2024	366	184,01	3,68	1.347	1	119	
	01/01/2024	15/03/2024					1	75	
	01/01/2024	01/10/2024					1	275	
2025	01/01/2025	31/05/2025	151	211,91	4,24	640	0	0	
			1.826	991,35	19,83	5.906	15	4.039	1.867

Visto lo anterior, la entidad habría incurrido en un cumplimiento parcial de la obligación establecida en el Artículo 4 del Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratación administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, de tener contratado al menos un 2 por 100 de trabajadores con discapacidad en caso de que la plantilla total de la entidad, durante el periodo de ejecución del contrato, supere los 50 trabajadores, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

Acreditado el incumplimiento de la obligación y de conformidad con el Artículo 3 del Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, deben determinarse las responsabilidades a través del correspondiente procedimiento incoado por el Órgano de Contratación, pudiéndose imponer una penalidad económica consistente en detraer de las certificaciones o facturas pendientes de pago la cantidad que resulte de aplicar al importe de la garantía definitiva un porcentaje que, como máximo, será del 10 por 100 de la misma. Asimismo, el importe de la penalidad se graduaría en función del porcentaje de incumplimiento, respondiendo de ella la garantía definitiva constituida en caso de que el precio del contrato hubiese sido satisfecho en su totalidad o las certificaciones o facturas pendientes de pago no resultasen bastantes para atender al importe de la penalidad.

DESDE	HASTA	DÍAS	PLANTILLA MEDIA	2%	DÍAS A ACREDITAR
01/06/2020	31/05/2025	1.826	991,35	19.83	5.906

Paralelamente se ha contabilizado el número de días acreditados a lo largo del periodo de ejecución del contrato por los trabajadores con discapacidad contratados. De la comparativa entre ambos resultados se identifica que el porcentaje de incumplimiento se sitúa en el 31,62 % de la obligación, conforme a la siguiente tabla:

DESDE	HASTA	DÍAS CONTRATO	PLANTILLA MEDIA	2%	DÍAS A ACREDITAR	ACREDITA DISCAPACIDAD		DIAS QUE FALTAN POR ACREDITAR	% PENALIDAD
						TRAB.	DÍAS		
01/06/2020	31/05/2025	1.826	991,35	19.83	5.906	15	4.039	1.867	31,62

Para responder de sus obligaciones, el contratista constituyó garantía definitiva por importe de 6.185,85 €, sobre la que se puede imponer penalidad por importe máximo de 618,59 € (10 por 100 del importe total constituido). Dado que el porcentaje de incumplimiento de la obligación se ha determinado en un 31,62 por 100, corresponde la imposición al contratista de una penalidad por importe de 195,60 euros (el 31,62 % del 10% del importe de la garantía definitiva constituida).

TERCERO.- Mediante Orden 3969/2025, de 24 de noviembre, de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, se inicia el procedimiento de determinación de responsabilidades por incumplimiento de la obligación contractual establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del citado contrato de servicios, referente a lo establecido en el art. 42 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, siendo el importe de la penalidad que correspondería a dicho

incumplimiento (según el art. 3.1 del citado Decreto 213/1998) de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (195,60€).

El día 24 de noviembre de 2025 se le comunica a la empresa contratista la propuesta de penalidades formulada por la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales para que, en un plazo máximo de diez días hábiles, aporte la documentación o manifieste las alegaciones que considere oportuno. El acuse de recibo de esa comunicación es de fecha 24 de noviembre de 2025.

Finalizado el plazo concedido de trámite de audiencia, la entidad FEDERACIÓN DE PLATAFORMAS SOCIALES PINARDI, no ha presentado ninguna documentación o escrito en relación con la imposición de la penalidad antes descrita.

Por todo ello, procede confirmar en todos sus extremos la penalidad propuesta en la Orden 3969/2025, de 24 de noviembre, de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, por la que se inició el procedimiento de determinación de responsabilidades.

Al amparo de la anterior fundamentación y del Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratación administrativa de la Comunidad de Madrid, para apoyar la estabilidad y calidad del empleo y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes, previos los informes pertinentes de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad,

DISPONGO

Imponer a la entidad FEDERACIÓN PLATAFORMAS SOCIALES PINARDI (NIF G83169524) una penalidad por importe de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (195,60€).

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia o los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.



En Madrid,
a fecha de firma

LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES
(P.D. Orden 3147/2023, de 5 de diciembre, BOCM nº 304, de 22/12/2023)
LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA
NATALIDAD

(P.D. Resolución 1366/2026, de 30 de marzo)
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA

Firmado digitalmente por: GÓMEZ APARICIO ANA CRISTINA
Fecha: 2026.04.30 09:55